



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05-001-31-05-008-2020-00253-01  
Demandante: Margarita María González Posada  
Demandado: Colpensiones  
Asunto: Consulta Sentencia  
Procedencia: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín  
Magistrada Ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Temas: Retroactivo pensión de vejez, intereses moratorios.

**Medellín, octubre siete (7) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida el 16 agosto de 2022, por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARGARITA MARÍA GONZÁLEZ POSADA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05-001-31-05-008-2020-00253-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora MARGARITA MARÍA GONZÁLEZ POSADA, llamó a juicio a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a fin de que se condene a dicha entidad a reconocerle y pagarle el retroactivo pensional comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 30 de abril de 2020, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

En respaldo de tales súplicas, se indicó que a la señora Margarita María González Posada le fue reconocida la pensión de vejez desde el 1° de mayo de 2020, por medio de la resolución SUB 98067 del 24 de abril de 2020, para lo cual se tuvo en cuenta un total de 1272 semanas cotizadas y un monto del 90%, obteniendo una mesada pensional de \$1.931.691, bajo los parámetros del régimen de transición pensional.

Se expuso, que la actora nació el 18 de diciembre de 1956, cumpliendo los 55 años de edad el mismo mes y día del año 2011 y su último aporte al sistema de pensiones lo realizó el 31 de marzo de 2019, por lo que ha de entenderse que operó el retiro tácito del sistema general de pensiones por el hecho de no continuar cotizando, pese a ello no se le reconoció retroactivo alguno, razón por la cual interpuso los recursos contra la Resolución SUB 98067 del 24 de abril de 2020, a fin de que se le reconociera el mencionado retroactivo pensional, mismos que fueron resueltos negativamente a través del acto administrativo GNR 98067 del 24 de abril de 2020, y SUB 123326 del 8 de junio de 2020.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

La entidad convocada al proceso, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que es cierto lo indicado con respecto a la fecha de nacimiento de la actora y los demás presupuestos que estén acreditados con la respectiva documentación que se anexa en la demanda, no obstante, al no cumplirse el requisito de retiro formal del sistema de seguridad social en pensiones (R), el reconocimiento de la pensión de vejez se realizó con corte de nómina, no asistiéndole derecho al retroactivo pretendido.

En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer el retroactivo pensional; inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993; prescripción e imposibilidad de condena en costas.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 16 de agosto de 2022, por medio del cual, condenó a Colpensiones a pagar la suma de \$26.336.504, por concepto de retroactivo pensional calculado a partir del 1º de abril de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, autorizándose el descuento de los aportes a salud del retroactivo pensional ordenado, asimismo reconoció el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo pensional liquidado a partir del 01 de agosto de 2019 y hasta el momento en que se haga efectivo el pago total de la obligación a la tasa más alta vigente al momento de dicho pago, de igual manera condenó en costas a la parte demandada.

Decisión que no fue recurrida.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, no se pronunció ninguna de las partes.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

### **2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA**

Señala la Sala que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

- Que la señora Margarita María González Posada, nació el 18 de diciembre de 1956, conforme en se evidencia en cedula de ciudadanía, *obstante en folio 12 del anexo 01DemanaPoderAnexos.pdf digital*.
- Que la actora, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez el 21 de febrero de 2020, con radicado N° 2020\_2419116, prestación que le fue reconocida mediante Resolución SUB 98067 del 20 de abril de 2020, *obstante en folios 25 al 32 del anexo 01DemanaPoderAnexos.pdf digital*.

- Que la parte activa del litigio, realizó su último aporte al sistema general de pensiones el 31 de marzo de 2019, con el empleador Cooperativa de Transportes San Antonio, véase *en folios 25 al 32 del anexo 01DemanaPoderAnexos.pdf digital*.

- Que la actora, mediante radicado N° 2020\_5409262, interpuso recurso de reposición en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en forma negativa mediante Resolución SUB 123326 del 08 de junio de 2020, resuelve confirmar en todas y cada una de las partes de la resolución SUB 98067 del 24 de abril de 2020, *obstante en folios del 43 al 52 del anexo 01DemanaPoderAnexos.pdf digital*.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe esta Sala de Decisión determinar:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta proferida por la Juez Octava Laboral del Circuito de Medellín, verificando para tal fin si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el 1° de abril de 2019 y el 30 de abril de 2020, en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) la demandante, tienen derecho al reconocimiento del retroactivo pensional en los extremos ordenados en la sentencia, (ii) siendo procedente el reconocimiento de los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, mismos que se causan desde el 21 de febrero de 2020, en consecuencia, dicha sentencia debe ser MODIFICADA en el numeral segundo y CONFIRMADA en lo demás, como se pasa a explicar:

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

No es objeto de discusión en el presente litigio, que la demandante, ostenta calidad de pensionada, status que le fue otorgado por medio de la Resolución SUB 98067 de 2020, a partir del 1° de mayo de la misma anualidad. Centrándose el problema jurídico en determinar si hay lugar al reconocimiento de las mesadas retroactivas, las cuales se pretenden a partir del 31 de marzo de 2019, fecha de la última cotización al sistema.

Para resolver la controversia debe indicarse que la regla general del disfrute de la prestación de vejez, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 13 y 35 de Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, lo es que para la inclusión en nómina de pensionados es requisito previo que se acredite la desafiliación del sistema, cuando se trata de trabajadores del sector privado y el retiro del servicio, respecto a servidores del Estado. Así lo recordó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL 1810 del 27 de mayo de 2020:

*“En ese orden, es evidente y surge nítidamente del precepto en comento (Artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990), que, para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez, es necesaria la desafiliación del sistema, lo que consecuentemente indica que mientras no exista esa desafiliación, el pensionado no puede recibir el importe de la mesada. ...*

*Ante ese panorama, la Corte reitera que el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional, no supone una desafiliación automática del sistema. Ello es así porque, como se vio, el retiro efectivo del sistema es una condición necesaria para el disfrute de la pensión, formalidad que no puede deducirse de la simple cesación en el pago de los aportes, más aún si, al margen de que un trabajador consolide el derecho a la pensión de vejez en determinado momento, mantiene la posibilidad de seguir afiliado y continuar cotizando, evento en el cual esos aportes adicionales tendrán como propósito incrementar el monto pensional, cuya cuantía quedaba determinada en el momento de dicha causación(Sentencia CSJ SL 15091-2015).”*

En concordancia con lo anterior, el inciso segundo del Artículo 4 de la Ley 797 de 2003, que modifica el Artículo 17 de la Ley 100 de 1993, preceptúa que la obligación de cotizar al Sistema pensional, cesa al momento del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez *“La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.”*

La excepción a la regla general, se presenta en dos situaciones, la primera, en torno a desafiliación formal, que no resulta necesaria para los casos en los cuales es posible, a través de otros hechos acreditados en el proceso, deducir la voluntad inequívoca del afiliado de no continuar cotizando al sistema para acceder al derecho pensional (*entre otras, sentencia SL5306 de 2016 y SL 900 de 2018*) y la segunda situación, corresponde a aquellos asuntos en los cuales las cotizaciones posteriores del reclamante se presentan por la inducción en error, por parte de la administradora pensional, debido que se niega injustificadamente el derecho. (*entre otras, sentencia SL 4680 de 2020 y SL1320 de 2022*).

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el sublite quedó establecido que a la promotora del proceso le fue reconocida la prestación económica de vejez por medio de la Resolución SUB 98067 de 2020 a partir del 01 de mayo de 2020.

Igualmente está acreditado que la pretensora cumplió los 57 años de edad el 18 de diciembre de 2013 y cotizó hasta el 31 de marzo de 2019, fecha para la cual acreditaba la densidad de semanas mínimas requeridas para acceder a la prestación bajo el régimen de transición, toda vez que contaba con 1272.14 semanas, tal como se evidencia en la historia laboral obrante a *folios 1 al 8 del*

*anexo HISTORIA LABORAL RADICADO 05001310500820200025300.PDF*  
del expediente digital.

Si bien en la historia laboral de la accionante se observa que no se reportó novedad de retiro en el último ciclo cotizado, esto es marzo de 2019, de las particularidades del caso, es posible deducir la voluntad inequívoca de la afiliada de retirarse del sistema. Ello, por cuanto, es claro que con la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada por la demandante el 21 de febrero de 2020, se expresa la decisión de desafiliación del sistema, situación que se hace más evidente si se tiene en cuenta que la afiliada, llevaba 10 meses sin realizar aportes, además, contaba con una densidad de semanas suficientes para consolidar el derecho, subrayando, además, que la omisión en reportar la novedad del retiro, corresponde al empleador y no puede afectar el derecho al reconocimiento del retroactivo pensional de la accionante.

De manera que, resulta procedente confirmar la decisión en este punto, precisando que, revisada bajo la égida de la consulta, la liquidación efectuada por el Juzgado, se concluye que la misma se encuentra ajustada a derecho y, asimismo, como lo refirió la falladora, no operó el fenómeno prescriptivo.

### ***Intereses Moratorios***

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la Sentencia SL 703 de 2013, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, flexibilizó el criterio según el cual, la aplicación de los intereses moratorios del Artículo 141 era objetiva:

*“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura*



*provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.*

Y en la Sentencia SL 4174 del 02 de octubre de 2019, radicación 54375, precisó los eventos que por excepción excluyen la aplicación de los intereses moratorios, así:

*“En lo que respecta al reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, si bien como ya se dijo, operan por el simple retardo de la administradora en la satisfacción de la prestación pensional, esta Sala también ha estimado que no en todos los casos es imperativo condenar a los intereses moratorios, y ha definido una serie de circunstancias excepcionales, en que se exonera de su pago, como por ejemplo: i) cuando se trata de prestaciones pensionales consolidadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; ii) cuando existe incertidumbre respecto de los beneficiarios o titulares del derecho pensional; iii) en las situaciones en que se trata de una nueva liquidación del monto y por cuanto de ello se eleva la cuantía de la mesada pensional; iv) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo; v) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial; vi) cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad; vii) cuando el pago de las mesadas pensionales no superó el término de gracia que la ley concede a la entidad que deba conceder la prestación pensional (CSJ SL5079-2018), situaciones que no ocurren en el caso de estudio.*

Claro está que en el sub lite, no se presenta ninguna de las situaciones planteadas en el precedente jurisprudencial, que permita exonerar a Colpensiones del reconocimiento de intereses moratorios, pues si bien la decisión de Colpensiones, en principio, encuentra respaldo en el Artículo 13 del Decreto 758 de 1990, la jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por más de una década ha tenido uniformidad en el alcance del requisito de desafiliación del sistema derivado de la suspensión de

las cotizaciones y la solicitud del derecho pensional, como expresión de la voluntad inequívoca de retiro, no encontrándonos frente a una novedad o cambio jurisprudencial reciente.

Por lo dicho y toda vez que conforme al Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los intereses moratorios se causan desde el momento en que vence el plazo que tienen las administradoras para resolver la solicitud, dado que es a partir de su finalización que la prestación es exigible y el deudor se encuentra en mora.

En relación con lo anterior el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, dispone que los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro meses, después de radicada la solicitud por el peticionario.

En igual sentido, el Decreto 656 de 1994 en su Artículo 19, prescribe que el Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, sin que, en ningún caso, pueda exceder de cuatro meses, inclusive, ha sido clara la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en señalar que los intereses moratorios del Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, deben reconocerse una vez vencido el término de cuatro meses luego de presentada la solicitud, así lo sostuvo la citada Corporación en sentencia SL 435 de 2021.

En este caso la solicitud del derecho pensional se presentó el 21 de febrero de 2020, de manera que los intereses se causan desde el 20 de junio de la misma anualidad hasta la fecha del pago de la obligación, y no desde el 19 de agosto de 2019, como lo ordenó la a quo, toda vez que debe tenerse en cuenta la fecha de la reclamación y no la de causación del derecho.

Sin costas en esta instancia.

### **3. DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

### **FALLA**

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida el 16 de agosto de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la MARGARITA MARÍA GONZÁLEZ POSADA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el sentido que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se causan a partir del el 21 de febrero de 2020 y hasta la fecha del pago efectivo de la obligación.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
**Magistrada**



**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**  
*Se suscribe con firma estancada por salubridad pública*  
*(Art. 11 Dcto 491 de 2020)*



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
**Magistrado**